Cuenta Pública de S.E.

el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ante el Congreso Nacional

Congreso Nacional, chilenos y chilenas, habitantes de nuestra patria:

Por cuarta y última vez vengo a dar cuenta al país de los avances y desafíos de mi gobierno.

¿Cómo valorar los logros alcanzados sin caer en la autocomplacencia, reconocer tropiezos y errores sin ser derrotista, asumir los cambios de timón cuando fue necesario hacerlos, e identificar los desafíos pendientes con decisión pero sin voluntarismo?

¿Cómo ponderar los cambios de Chile y el mundo en estos años y qué rol ha jugado el gobierno en ellos?

Estas son preguntas que me hacía mientras preparaba esta cuenta. Son preguntas difíciles, pero los principios con los que abordaré mis respuestas pretenden ser claros y sencillos. Con humildad, con firmeza y con honestidad.

Asumimos el gobierno después de una de las movilizaciones más grandes de la historia reciente de Chile, a la que siguió una pandemia que trastocó las prioridades de todos los gobiernos del mundo y nos recordó que nadie se salva solo. El estallido social de 2019 fue la expresión de un legítimo malestar acumulado en el marco de un proceso de modernización acelerado de nuestra sociedad que expresó en esos meses todas sus contradicciones. Hubo episodios de violencia inaceptable que no pueden ser justificados, como la quema del Metro, la destrucción de patrimonio público y privado y la agresión a Carabineros, y como respuesta por parte del Estado se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos, incluso con resultado de muerte y lesiones gravísimas, muchas de las cuales aún están esperando justicia. Mucho se ha discutido sobre el significado de estos eventos, pero si algo no se puede negar es que la gran mayoría que participó de las manifestaciones lo hizo de forma pacífica y con una genuina voluntad de cambio.

Con el paso del tiempo —quizás no suficiente para tener una evaluación histórica pero sí para sacar aprendizajes— me atrevo a afirmar que los chilenos y chilenas exigieron terminar con los abusos, acceder a más derechos y bienestar y tener una voz protagónica en el devenir de la patria. Pero lo hicieron sin renegar de sus propias trayectorias vitales, que dan cuenta de un innegable progreso en las últimas décadas desde la recuperación de la democracia, tanto en la dimensión material como en el ejercicio de libertades que antes, hace no tanto tiempo, estaban vetadas. Esto no fue bien aquilatado por izquierdas ni por derechas. Por un lado, se ha tratado de resignificar este período como un mero ejercicio de violencia desbocada, llegando a tildarlo de “estallido delictual”, lo que desconoce las causas profundas que generaban el malestar. Por otro, se pretendió desconocer una historia tanto colectiva como individual de progreso, que permitió a las familias chilenas acceder a niveles de bienestar y libertad inimaginados poco tiempo atrás. La ansiedad por sintonizar inmediatamente con un sector de la población, sin hacer una reflexión pausada, demostró no ser un buen camino.

Pese a todas las tensiones y rivalidades, Chile logró encauzar el proceso por la vía institucional, siguiendo lo mejor de su tradición republicana, pero el germen de las interpretaciones reduccionistas estaba plantado, y se expresó de manera clara en los dos procesos constituyentes que intentamos. El rechazo claro de ambas propuestas, dominada cada una por fuerzas antagónicas que cometieron el error de negar la legitimidad de quien tenían enfrente, dio cuenta de un pueblo que exigía acuerdos entre nosotros, sin renunciar a su historia ni tampoco a los derechos conquistados tras largas luchas.

Considero un error entender estos procesos constitucionales como un fracaso. Fueron ambos un recordatorio que Chile no quiere ni precisa de vanguardias que se escapan del sentido común de su propio pueblo, y una profunda reivindicación de que este país lo construimos entre todos, sin negar a quien piensa distinto. La ciudadanía nos enseñó que no tiene sentido pretender pasarnos aplanadoras mutuamente. Ustedes conocen mi postura, los ideales de igualdad que me animan. Soy una persona que cree en el cambio y el progreso social, que piensa que Chile necesita importantes transformaciones para tener más justicia y una democracia más profunda. El desafío era y sigue siendo cómo lograr

aquello sin despertar legítimos temores y sin desconocer los logros individuales y sociales que tenemos buenas razones para valorar.

En lo que respecta a nuestro gobierno, hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad. El resultado de la primera vuelta y la elección parlamentaria que estableció que las fuerzas progresistas serían minoría en el Congreso por los siguientes cuatro años, no fueron analizadas como correspondía. Tuvo que ocurrir el primer plebiscito de salida para dejarnos en claro que no bastaba con las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar, que era necesaria una mejor síntesis entre generaciones y proyectos progresistas. Hubo que ajustar el rumbo.

Se ha tratado de imponer la tesis de que este ajuste de rumbo y de énfasis programático del gobierno respecto a nuestro programa original, y la incorporación decidida al corazón del gobierno de otras fuerzas políticas con las que antes habíamos antagonizado, fueron una claudicación respecto a los motivos que nos llevaron a participar en política. Refuto de manera tajante esta interpretación y, por el contrario, afirmo que una de las virtudes de nuestro gobierno fue precisamente ser capaz de ajustar sus prioridades sin abandonar sus principios y ensanchar su espacio de alianzas para hacer posibles las transformaciones que Chile necesita.

¿Hemos logrado todo lo que queríamos con la profundidad que queríamos? No, pero hemos avanzado en esa dirección atendiendo a las condiciones en que nos tocó gobernar y a la correlación de fuerzas no solo del Congreso, sino de todo el espectro social. Tal como en los años 30 el Frente Popular no pudo avanzar en la sindicalización campesina para en cambio avanzar en la industrialización de Chile, o en los 90 no se pudo terminar con todos los enclaves autoritarios por falta de votos en el Congreso, hoy nos tocó a nosotros ponderar nuestras aspiraciones para conseguir avances concretos y tangibles para el pueblo de Chile. La reforma de pensiones, que por 10 años había resultado infructuosa, es quizás el mejor ejemplo de ello.

Y ese es justamente el arte de la política democrática. Ser capaces de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en torno a un bien común compartido en que las distintas

partes deben ceder respecto a sus posiciones originales. Nuestras visiones programáticas son firmes, pero también nuestra convicción de que las urgencias sociales no pueden esperar una mejor correlación de fuerzas: la política también debe responder al presente.

En este punto quiero reivindicar con mucha fuerza la unidad del progresismo para lograr estos consensos que, pese a todos los pronósticos que anunciaban tempranos quiebres, llega a este último año de gobierno unido y con más acuerdos que diferencias tanto respecto a lo obrado como a lo mucho que queda por hacer. Es la unidad de quienes reivindicamos que el desarrollo económico es compatible con el cuidado del medio ambiente, que la distribución justa de la riqueza es tan importante como su creación, que la democracia y los derechos humanos no se transan, que el mercado no se regula solo, que el Estado tiene un rol importante junto con el sector privado y la sociedad civil en la construcción del bien común, y que la convivencia se fortalece desde la esperanza y no desde el miedo. Esta unidad es fundamental y necesaria para construir un Chile más justo y próspero.

A todo gobierno se le evalúa por una mezcla de su cumplimiento programático, como por sus logros concretos durante el período que le tocó gobernar, independientemente de sus intenciones. El nuestro no será la excepción. Tengo la convicción de que un buen gobierno no es solo aquel que muestra números o *tickets* de cumplimientos, sino el que logra que el Estado sea gobernado con la capacidad de construir acuerdos sociales. En el fondo, no se trata de más o menos Estado, o de frases amenazadoras mezclando a quienes abusan con la mayoría de los servidores públicos que sí hacen su trabajo con vocación y responsabilidad: se trata de tener la capacidad política de procesar con sentido de progreso y justicia social las tensiones que produce el desarrollo. Esto es precisamente lo que hemos logrado en nuestro gobierno con las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, la reforma de pensiones, el Sistema Nacional de Cuidados, el haber acelerado la inversión, la solución a la deuda histórica con los profesores, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el Plan Nacional de Búsqueda, la Estrategia Nacional del Litio y los avances en derechos de las mujeres, entre otras realizaciones. Esto es lo que jamás se lograría con

una política hecha desde el miedo, la desinformación, la desconfianza y el pesimismo. Esto es, al final del día, la gobernabilidad.

Además de todo lo anterior, es necesario tener presente el escenario internacional. Porque Chile está inserto en el mundo, y el mundo que nos toca vivir cambia vertiginosamente haciendo de la incertidumbre su característica central.

En 2022 el mundo emergía con dificultad de los escombros de la pandemia. Las cadenas de suministro estaban interrumpidas, la inflación presionaba a las familias y muchos empleos se habían destruido. La guerra había regresado a Europa y la democracia se tambaleaba donde antes se daba por sentada. Hoy el orden internacional ya no gira en torno al multilateralismo. Ha emergido un nuevo escenario, marcado por alianzas pragmáticas, una reconfiguración de las cadenas productivas globales, y una competencia por recursos estratégicos que afecta directamente a países abiertos como el nuestro. La revolución tecnológica, liderada por la inteligencia artificial, está afectando aceleradamente el trabajo, la educación, los medios y hasta la política misma. Y en este nuevo contexto, la democracia enfrenta desafíos inéditos, no menos graves a los que dieron lugar a los baños de sangre del siglo XX. La realidad nos recuerda una vez más que las libertades y derechos conquistados no hay que darlos por sentado y deben ser defendidos por cada generación.

En Chile, hemos respondido con firmeza y nos hemos puesto la tarea de avanzar hacia un clima político más dialogante, consciente de los límites, pero también de las tremendas posibilidades que tenemos como país.

Este es el punto de partida del mensaje que hoy les presento. El objetivo es rendir cuenta a Chile con honestidad, y de renovar, con serenidad y convicción, el compromiso con un país que ha cambiado y que, con toda justicia, sigue esperando más.

Hecha esta primera reflexión, destacaré en esta Cuenta Pública los logros más importantes de nuestro período de gobierno, plantearé desafíos pendientes, identificaré los límites que enfrentamos, y anunciaré medidas y decisiones para lo que resta de gobierno. Lo haré dividiendo mi presentación en nuestras tres seguridades: 1) seguridad ciudadana; 2)

seguridad social; 3) seguridad económica y desarrollo sostenible; y 4) promoción de la democracia y la cohesión social.

El crimen y la inseguridad, son la principal preocupación de los chilenos. Es un fenómeno mundial del que nuestro país no ha estado exento.

Y hemos actuado en consecuencia. En 2021 estábamos ante una tendencia preocupante: aumento sostenido de homicidios y delitos violentos como encerronas, portonazos y balaceras. Esto acompañado de un creciente control territorial de bandas de crimen organizado y una frontera con un débil control ante la migración irregular. Hemos logrado romper la curva de la tasa de homicidios que hace años venía en ascenso de la delincuencia con un trabajo serio y sostenido de Carabineros, la PDI, la Fiscalía, gobierno y municipios. Pero no es suficiente.

El Estado no está para buscar excusas, sino dar soluciones. No permitiremos jamás que se normalice la delincuencia, sea del carácter que sea. Ante quienes afirman que Chile está de rodillas frente a la delincuencia, yo respondo que se equivocan: Chile está de pie y peleando palmo a palmo contra quienes quieren arrebatarnos el derecho a vivir en paz. Y vamos a ganar esta batalla.

Algunos dirán mal intencionadamente que no se ha hecho nada. Pero no es cierto.

Este mismo Congreso ha aprobado más de 60 leyes que han permitido modernizar nuestra institucionalidad ante las nuevas formas del delito, y la mayoría de estas iniciativas ha tenido apoyo transversal. Ahí están la Ley Antinarcostráfico, las técnicas investigativas, la tipificación del robo de madera, la mayor dureza con la reincidencia, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública o la modernización de la Ley Antiterrorista. Pero aún falta, y en particular me refiero a la ley de inteligencia económica: es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado, y permitir que se levante el secreto bancario. No se puede pedir en la mañana más eficacia ante el crimen organizado y votar en contra de levantar el secreto bancario en la tarde. Si no aprobamos esta ley, los cabecillas de estas bandas seguirán impunes. Insto a este Congreso a avanzar en este proyecto ya.

Logramos también el aumento significativo de los recursos a las policías que les ha permitido renovar su equipamiento y contar con mejores herramientas para enfrentar la delincuencia. Estas instituciones además tendrán aumentos progresivos en su dotación para dar seguridad y respuesta oportuna a nuestra gente.

Ahí está la nueva infraestructura, lista o en construcción, para Carabineros de Chile o la PDI en Arica, Antofagasta, Taltal, Ollagüe, Quilicura, Viña del Mar, Yumbel, San José de la Mariquina, Copiapó, Maipú, San Ramón, Tocopilla, Peñaflores, Peumo, Los Andes; y la nueva Escuela de Formación de Carabineros del Grupo Concepción, que fortalecerá la capacitación profesional y el despliegue operativo de nuevos efectivos, además de la nueva Escuela de Suboficiales de Carabineros.

Ahí está la destrucción, en solo tres años, de más de 67 mil armas, lo que equivale al 30% de todas las armas destruidas en Chile desde 1990. Porque, pese a lo que promueven algunos, menos armas circulando es más seguridad para todos.

Ahí está el descenso significativo de los actos de violencia en la Macrozona Sur. La cantidad de lesionados disminuyó en más de un 70%, hubo un 60% menos de ataques incendiarios, y se redujeron en 82% los inmuebles incendiados.

Ahí está el reforzamiento de la frontera norte mediante la reforma constitucional que habilitó el despliegue de las Fuerzas Armadas en una zona que se encontraba desprotegida: el resultado es un descenso de 48% en la migración irregular descontrolada, legada por el gobierno anterior.

Ahí está la nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres y los 24 centros de atención especializada en violencia de género. Falta aún la aprobación de la Defensoría de Víctimas que requiere un último esfuerzo: insto a este Congreso a darle celeridad.

Ahí está la recuperación de espacios públicos a lo largo de todo Chile, que es deber de todos cuidar, la eliminación de los narcomausoleos, la implementación y mejora continua del Plan Calles sin Violencia. Los vecinos de la plaza Los Cuncos en Renca, o de la plaza Augusto D'Halmar Oriente en San Ramón y otras comunas han visto cómo se transforman

y llenan de vida espacios que por mucho tiempo les fueron ajenos o estaban abandonados.

Ahí está el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que permitirá en cinco años sumar más de 15 mil nuevas plazas para enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento en las cárceles.

Estos logros y avances son indiscutibles, pero no dan para celebrar ni menos para relajarse. Debemos seguir con más fuerza y decisión.

Por ello, también resulta fundamental el trabajo en reinserción y prevención del delito.

Es posible romper ese destino trágico en que la pobreza condena a algunos a la delincuencia: hay que prevenir, y una vez ocurrido el delito no podemos dejarlos a su suerte. Muchos de los jóvenes que caen presos ya tienen algún familiar en la cárcel. Romper ese destino trágico es un deber moral de toda sociedad. Y se puede. Ese es el objetivo del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil puesto en marcha desde 2023.

En materia de prevención los municipios juegan un rol esencial. Antes, estos debían competir por recursos para proyectos de seguridad. Desde 2023 implementamos el Sistema Nacional de Seguridad Municipal que entrega recursos permanentes a 120 comunas y financiamiento rotativo para otras 255 comunas año por medio.

En definitiva, mi mensaje respecto a la seguridad ciudadana es reconocer lo que se ha hecho y, a la vez, no conformarse con ello. Y, para seguir avanzando, necesitamos una sociedad unida. Porque cuando nos unimos, el crimen retrocede. Falta para ello una comprensión más profunda de que la seguridad no es una bandera partidista que pueda usarse para tratar de sacar réditos de corto plazo, sino una condición básica para que la sociedad pueda prosperar y vivir en paz.

En este camino, Carabineros de Chile, la PDI y las Fuerzas Armadas han sido piezas fundamentales. Les rindo homenaje, por su compromiso cotidiano, muchas veces silencioso y siempre arriesgado, por protegernos. El sacrificio de funcionarios como Daniel Palma, Rita Olivares, Alex Salazar, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo, Misael Vidal, Camila Silva

y Daniela Salazar no puede pasar al olvido. No son mártires de un gobierno, ni de un sector. Son mártires de Chile.

Hoy, las policías cuentan con más dotación, mejores tecnologías, mayor respaldo jurídico y social. Pero también tienen un mandato ético claro: actuar con determinación, siempre dentro del Estado de derecho. Defender la seguridad de todos, siempre con respeto a los derechos humanos. Porque desde esa legitimidad se construye una fuerza eficaz, confiable y respetada.

Nuestro compromiso es seguir avanzando. No con promesas vacías, sino con hechos. Hechos que devuelvan la tranquilidad a nuestros barrios. Hechos que protejan a nuestras hijas e hijos. Hechos que hagan de Chile un país seguro, justo y digno para todos.

La esencia de un gobierno progresista es que su práctica política apunte a la universalidad. Es cierto que en nuestra sociedad persisten diversas formas de discriminación injusta que deben ser enfrentadas, pero no podemos olvidar que aunque se presente como radical, la política identitaria aislada suele terminar en una política de grupos de interés que no cambia la base estructural de las desigualdades.

Desde esta convicción, en el ejercicio de mi gobierno hemos impulsado políticas que son universales. Por eso impulsamos el Copago 0, las 40 horas, la incorporación de un seguro social en pensiones, el royalty a la gran minería, la modernización y ampliación del transporte público, el aumento del sueldo mínimo o el Sistema Nacional de Cuidados.

En materia laboral los avances para las y los trabajadores -no colaboradores, trabajadores- son claros. En 2022, responsablemente, implementamos un duro ajuste fiscal a una economía sobrecalentada, con alta inflación y precios de muchos servicios importantes congelados tras la pandemia. Mi primera definición fue que ese ajuste no lo iban a pagar los trabajadores ni los bolsillos de las familias. Y cumplimos.

Aumentaremos el sueldo mínimo de 350 mil pesos a 539 mil pesos mensuales. Esta será la mayor alza de las últimas décadas y nos posiciona como el país con el salario mínimo más alto en Sudamérica. Y lo hemos hecho bajando a tasas históricas la informalidad laboral,

que es la permanente amenaza de quienes siempre encuentran una excusa para oponerse a aumentar los ingresos de los trabajadores.

Concretamos este aumento al mismo tiempo que las cifras de inflación interanual cayeron de 14% a 4.5%, se crearon cerca de 600 mil nuevos empleos en el país, de los cuales más del 90% son empleos formales, recuperamos la participación laboral de las mujeres a niveles pre pandemia, y apoyamos a las mipymes en este esfuerzo colectivo.

Debemos seguir en esta senda, en especial porque el número de desempleados en nuestro país sigue siendo alto. Por ello anuncio que enviaré a este honorable Congreso un proyecto de ley que unifica y optimiza los actuales subsidios al empleo para incentivar la contratación de las mujeres y los jóvenes que están buscando trabajo.

Pero para alcanzar el pleno empleo no hay receta mágica ni atajo. Tenemos que crecer más. Me detendré en este asunto central más adelante.

Uno de los avances emblemáticos de nuestro gobierno es la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Cuando se presentó este proyecto al Congreso en 2017, se afirmó que era una fantasía, que tendría consecuencias catastróficas. Insistimos, aunamos voluntades y buscamos acuerdos con empleadores y trabajadores que lo hicieron posible. Eso es gobernabilidad.

Cientos de empresas se adelantaron y bajaron sus jornadas a 40 horas, como por ejemplo la empresa Photio, donde trabaja Pamela Martínez quien nos acompaña en esta Cuenta Pública.

Eso es la ley de 40 horas: la posibilidad de tomar once en familia, participar en una organización social, hacer deporte, llegar a casa antes de que tus hijos duerman. Es ser más dueños de nuestro propio tiempo.

Además, gracias a la ley de conciliación de la vida laboral y familiar, desde 2024 las y los trabajadores que cuidan de sus hijos menores de 14 años o de familiares con discapacidad o dependencia pueden teletrabajar.

Y muy importante: en Chile hay más de 1 millón de mujeres que no pueden trabajar remuneradamente porque tienen que cuidar a su familia. El mercado laboral chileno está marcado por brechas de género. La participación de las mujeres en el mercado laboral es sólo del 53%, versus un 72% de los hombres. Las mujeres tienen más obstáculos para conseguir trabajo formal y derecho efectivo a la seguridad social. También reciben menos ingresos que los hombres, diferencia que aumenta luego de tener al primer hijo.

Por ello insistimos en la urgencia de sacar adelante el proyecto Sala Cuna para Chile. Si se aprueba, se reducirían de manera significativa las barreras a la contratación laboral femenina y las brechas salariales entre hombres y mujeres, se incentivaría la participación laboral femenina en el mercado laboral formal, se incorporaría la posibilidad de dar cumplimiento a esta obligación en establecimientos públicos, incrementando el financiamiento de estos y fomentando la creación de nuevos jardines, y mejorarían los estándares educativos para públicos y privados. Las salas cuna deberán contar siempre con reconocimiento oficial.

El proyecto se puede perfeccionar pero no podemos seguir postergándolo en discusiones infinitas. Es prioridad para la sociedad y llamo a que lo sea también para este Congreso.

Para terminar sobre materia laboral, insistiremos en la discusión sobre la necesidad de tener mecanismos de negociación multinivel o ramal. Los sindicatos y las centrales sindicales lo han planteado desde hace años y no concibo que haya discusiones vetadas en nuestra sociedad.

La reforma de pensiones es otro gran hito de este ciclo político. Y no es un logro exclusivo del gobierno sino una demostración de la buena política. Hubo más de un momento en que la posibilidad de llegar a acuerdo estuvo a punto de naufragar. Se soportaron ingentes presiones de todas partes, incluidas por cierto las AFP, que fueron las principales opositoras a la reforma. Fueron muchos los que nos conminaron a “abandonar las reformas” por no tener mayoría en el Congreso o por la distancia que había con la oposición. Pero fuimos persistentes.

Y aquí me gustaría hacer un punto. Muchas veces se discutió la posibilidad de poner en votación la reforma sin acuerdo -y por ende rechazándola-, para que cada sector pudiera decir que había defendido sus banderas hasta el final. Pero quienes participamos de esta difícil negociación tuvimos la convicción de que los chilenos y chilenas no podían seguir esperando que la política continuara peleando por más de 10 años, mientras millones seguían con pensiones de miseria. Todos tuvimos que ceder respecto de nuestras posiciones originales, lo que nos valió enfrentar enconadas críticas de quienes afirmaban vehementemente que cualquier concesión equivalía a una derrota. No fue fácil, pero logramos sacar adelante la reforma y es la gente la que se va a ver beneficiada. Agradezco aquí a quienes de derecha, centro e izquierda actuaron pensando en Chile.

Por ello, desde septiembre aumentará la PGU a 250 mil pesos mensuales, comenzando con los mayores de 82 años; tendremos un nuevo seguro social y un bono para corregir la discriminación hacia las mujeres; los empleadores pasarán a aportar a la cotización; y las AFP estarán más reguladas, reduciéndose el espacio para el abuso. En definitiva, las pensiones de 2,8 millones de personas mayores aumentarán entre un 14% y un 35%, y mejorará además el ahorro nacional.

Esta es la buena política. Esto es gobernabilidad.

La pandemia del Covid-19 fue un desafío gigante para el mundo entero, pero sobre todo para los sistemas de salud. Y si casi siempre cuando un Presidente en ejercicio ocupa la frase “el gobierno anterior” es para lanzar una crítica, hoy quiero cambiar esa lógica y reconocer aquí la gestión del gobierno que me antecedió en el difícil manejo de la pandemia en su aspecto sanitario. Tanto en la gestión de vacunas como en la reconversión del sistema para hacer frente a la emergencia, Chile, con todos los dolores que nos dejaron las pérdidas de compatriotas, estuvo a la altura.

El principal reconocimiento se lo llevan, sin duda, las y los trabajadores de la salud, que dieron todo de sí. Chile entero les agradece por ello. Pero como sabemos que no basta con palabras, hemos impulsado mejoras concretas para estos trabajadores, como la materialización de reconocimiento histórico que nuestro país debía a quienes sostienen

nuestro sistema público de salud, los TENS, mediante la creación de la asignación especial técnica para más de 57 mil trabajadores de esta área, más de 85% de los cuales son mujeres. Esto representa mucho más que una mejora salarial. Destaco que esta medida logró respaldo unánime en el Congreso. Esto se suma a las indicaciones que ingresamos para incorporar definitivamente a los TENS al Código Sanitario.

Trabajamos para que en Chile todas y todos puedan ejercer su derecho a una salud oportuna y de calidad, sin importar sus ingresos ni lugar de residencia.

El mejor ejemplo de esto es el Copago 0, y permítanme ilustrarlo con un ejemplo concreto.

En 2022, Alessandra y Eduardo, de Alto Hospicio, tuvieron trillizos que al nacer estuvieron hospitalizados más de 80 días. Su primera preocupación fue siempre la salud de sus niños, pero no sabían cómo iban a pagar los más de 7 millones de pesos que costó el tratamiento. Gracias al Copago 0, no tuvieron que pagar ni un peso. Una política especialmente pensada para la clase media.

Otra política universal es la vacunación. En 2024 nos convertimos en el primer país del hemisferio sur en implementar la inmunización contra el virus sincial. Esta medida significó que el año pasado por primera vez no fallecieron niños menores de un año producto del virus. Quiero ser claro: quienes se oponen a las vacunas y desconocen la ciencia, amenazan la salud de la población.

En el fortalecimiento de la atención primaria de salud, nuestro gobierno alcanzará un total de 70 nuevos dispositivos de atención primaria a lo largo del país, desde la Posta de Salud Rural de Cariquima en la comuna de Colchane hasta el nuevo cesfam Thomas Fenton de Punta Arenas. Esta expansión de la red de atención primaria significa acercar la atención médica de calidad a cada rincón del país.

En abril pasado cumplimos con promulgar la ley de enfermedades poco frecuentes, fruto de una lucha de años de organizaciones de pacientes y sus familiares, e ingresamos un proyecto de ley que mejora y da sostenibilidad al fondo Ricarte Soto.

Aprovecho la ocasión para anunciar que después de haber escuchado a cientos de mujeres que por diversos motivos no han podido tener hijos deseándolo he instruido a nuestra ministra de Salud elaborar y presentar un proyecto de ley para regular y facilitar la fertilización asistida, tomando como base las mociones presentadas en el parlamento.

Compatriotas, cumpliendo con nuestro compromiso adquirido hace un año, hemos ingresado a este Congreso un proyecto de ley que termina con la ilegalidad y penalización del aborto. Por demasiado tiempo se ha tratado como criminales a las mujeres que han abortado. Son miles al año y se les ha obligado a la clandestinidad. Unas pocas tienen los recursos y contactos para hacerlo de forma segura, pero la gran mayoría camina por la cornisa sin saber si eso que pagaron a escondidas resultará, o si deberán enfrentar dolores, urgencias y hasta poner en riesgo su propia vida. Temen desangrarse y muchas llegan de todas formas a urgencias venciendo el miedo. Le pido al Congreso que en la tremenda diversidad de opiniones sobre la propuesta de legalizar el aborto con plazo que hemos ingresado no se nieguen a la discusión. Esas mujeres siguen ahí. Muchas pueden ser sus familiares, amigas, cercanas, y han cargado con un estigma que no merecen. Sacudámonos los prejuicios. Generaciones de mujeres han vivido y peleado por esto. No les nieguen al menos el debate democrático como ciudadanas plenas capaces de decidir.

Promover y proteger la salud mental ha sido otro de los énfasis de nuestra gestión en salud. Creamos la línea telefónica de prevención del suicidio *4141, aumentamos las becas de especialidad en psiquiatría e ingresamos el proyecto de ley integral de salud mental, como anuncié en la Cuenta Pública anterior. Además, al finalizar el gobierno, habremos habilitado 15 nuevos centros de salud mental, como comprometimos, y dejaremos al menos otros 23 centros en desarrollo para que inaugure el próximo gobierno.

Avanzamos igualmente con la implementación de la Ley del Trastorno del Espectro Autista, ley TEA, que siempre me mencionan cuando estoy en terreno. Gracias a ella hemos destinado recursos para implementar decenas de salas y equipos multidisciplinarios en la Atención Primaria de Salud para atender a niños, niñas y adolescentes con autismo a lo largo del país. Además, hemos fortalecido la red de salud con especialistas como

neurólogos, pediatras y fonoaudiólogos. Para 2025, tenemos programado implementar otras 48 salas y equipos en la salud primaria e incorporar 47 equipos de psiquiatras, terapeutas ocupacionales y psicólogos. No olvido cuando en la pequeña localidad de Michilla de la comuna de Mejillones, en la escuela unidocente Lucila Godoy Alcayaga, la profesora Rosa Contreras me mostró la sala de contención que habían implementado el año pasado en la escuela para los dos niños con TEA de los 17 estudiantes que tenía. Esta es una realidad que viven miles de familias que durante demasiado tiempo vivieron invisibilización y discriminación. Ya no más.

Uno de los desafíos más importantes que tenemos en lo que resta en nuestro gobierno es seguir reduciendo las listas de espera en un sistema presionado por el crecimiento de la demanda por consultas tras la pandemia y por el aumento de beneficiarios de Fonasa. No obstante, el tiempo de espera para consultas nuevas de especialidad bajó en torno a 90 días respecto a diciembre de 2021, y para cirugías disminuyó en 366 días frente a la misma fecha: es decir, el tiempo de espera para cirugías se redujo en un año. Seguiremos trabajando para disminuir estos plazos.

Justamente con el objetivo de brindar acceso oportuno a la salud y de manera equitativa, territorialmente hemos continuado con la política de Estado de ampliación de la red hospitalaria. Nuestro gobierno ha concretado la entrega de 12 hospitales que están actualmente en pleno funcionamiento en Putaendo, Quillota-Petorca, Carahue, Huasco, Curicó, Makewe-Padre Las Casas, Alto Hospicio, San Antonio, Casablanca, Collipulli, Lonquimay y Villarrica. Asimismo, iniciarán su operación y marcha blanca antes de marzo del 2026 los hospitales de Diego Almagro, Marga Marga, Melipilla, Curacautín, Queilén, Chile Chico, Cauquenes, Parral, El Salvador, el instituto Nacional de Geriatria y Quellón. Los hospitales, como los futuros de Ancud, Ñuble, Buin-Paine y Constitución, son una política de Estado que va más allá de un gobierno.

Recordando que este año se cumplen 20 años de la ley que creó las Garantías Explícitas en Salud y otorgó derechos exigibles en salud a los ciudadanos, anunciamos el nuevo decreto GES que representa la mayor inversión desde la creación del sistema con

aproximadamente 100 mil millones de pesos anuales adicionales. Este decreto incorporará tres nuevos problemas prioritarios: hospitalización para menores de 15 años con depresión grave, tratamiento tras el alta por cirrosis hepática para asegurar continuidad terapéutica de esta enfermedad frecuente y cesación del consumo de tabaco para mayores de 25 años incluyendo terapia farmacológica y apoyo psicológico. Además, fortaleceremos significativamente 10 problemas existentes con tratamientos de vanguardia como sensores de glucosa para diabéticos menores de 18 años y embarazadas, ampliación de detección de virus papiloma humano, mejores coberturas para epilepsia refractaria, leucemia, tumores del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas, asma bronquial grave y enfermedad renal crónica.

En materia de isapres, estamos impulsando un proyecto de ley que termina con la discriminación por edad y estado de salud, las preexistencias, porque ya acabamos con la discriminación por sexo con la ley corta, que además obliga a las isapres a cumplir plenamente con los principios de la seguridad social en el uso de las cotizaciones obligatorias de salud.

Es menester reconocer que si bien durante este período no pudimos hacer la reforma estructural de seguro único al sistema de salud que nos hubiera gustado, hemos avanzado en esa dirección, porque hoy Fonasa no solo garantiza atención gratuita en el sistema público, sino que a través de su nueva Modalidad de Cobertura Complementaria ampliará las opciones para sus asegurados, permitiéndoles acceder a prestadores privados a menor costo y con mayor libertad de elección. Esta modalidad representa un paso hacia una complementariedad público-privada más virtuosa, donde los usuarios de Fonasa pueden beneficiarse de lo mejor de ambos mundos: la seguridad del sistema público y la flexibilidad del sector privado, todo bajo un esquema de protección financiera más robusto.

Cada familia de Chile forja el futuro de nuestro país. Al apoyarlas, protegemos también a la niñez y la adolescencia en toda su diversidad.

En esa línea, hoy el Subsidio Único Familiar llega a 471 mil personas más que en 2022, y desde 2024 se asigna sin necesidad de postular a los menores de 18 años del 40% más vulnerable.

La Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que muchos conocen como Ley Papito Corazón, ha sido una ayuda concreta para las madres o padres que llevan en soledad la tarea de mantener a sus hijos e hijas. A dos años de su implementación, gracias a esta ley se ha ordenado el pago de casi 2,5 billones de pesos, equivalente a lo que recaudan 52 teletones.

Para mujeres como Esperanza Núñez que está hoy aquí con nosotros, esta ley llega como un acto de reparación, años después de que sacó adelante sola a sus hijos. Son demasiados los casos de padres irresponsables que abandonan a sus hijos y dejan toda la carga económica de la crianza en la madre. Con esta ley a ellas y sus familias les hacemos justicia.

También hemos implementado la ley que crea el Sistema de Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que demoró 10 años en tramitarse, y las Oficinas Locales de la Niñez que estarán presentes en todas las comunas del país.

Hoy les hablo a las niñas y niños de Chile. A los de Michilla y a los de Puerto Williams, a los de Lonquimay y a los de San Pedro de la Paz, que esta semana en la Boca Sur fueron golpeados por una violencia inaceptable que no quedará impune. Le hablo a la Violeta del futuro próximo. Sueñen, jueguen, expérense. Chile también es de ustedes.

En Chile, cuidar ha sido históricamente un trabajo invisible, sostenido casi siempre por mujeres que han debido postergar su vida para hacerse cargo de otras personas. Durante décadas, se asumió como una responsabilidad privada, sin reconocimiento ni apoyo. Esa realidad ya no puede continuar. Lo vemos cuando una mujer cuida a su hijo con dependencia severa y a su madre con alzhéimer, cuando una persona mayor cuida a otra aún más frágil.

Por eso, como gobierno decidimos hacer del cuidado una prioridad. Chile Cuida es el camino que estamos trazando con decisión. Hemos creado la credencial de persona cuidadora, que las reconoce y les permite acceder a atención preferente en el Estado y a descuentos en las empresas privadas que se han ido sumando. Hemos extendido la Red Local de Apoyos y Cuidados, con trabajadoras que, por ejemplo, en La Unión acompañan en sus casas a quienes cuidan y les enseñan a movilizar a sus familiares sin dañarse. También estamos habilitando 100 Centros Comunitarios de Cuidados en todo Chile, donde por ejemplo ya en Cerro Navia una mujer puede dejar a su madre por unas horas para asistir a espacios de autocuidado. Esto no significa que todos estén inaugurados a marzo 2026, pero sí quedarán todos habilitados durante el 2026. En una sociedad que envejece rápidamente, también estamos fortaleciendo los Centros Diurnos para personas mayores, los Establecimientos de Larga Estadía y los Condominios de Viviendas Tuteladas, como el que hoy acoge en Punta Arenas a personas mayores que necesitan autonomía, comunidad y seguridad.

El compromiso con el cuidado no puede depender solo de una administración. Por eso impulsamos el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, un sistema que innova en protección social al reconocer el cuidado como un derecho de carácter universal, para que una madre que cuida a su hijo con discapacidad reciba el mismo respaldo en cualquier lugar de Chile, para que un trabajador no tenga que elegir entre su empleo y cuidar a su pareja con cáncer. Porque el cuidado no es un favor: es uno de los pilares que sostienen la sociedad y es de justicia que lo asumamos entre todos y todas.

Por eso llamo a este Congreso pleno a aprobar el proyecto de ley Chile Cuida y a todos los sectores políticos a que sigamos avanzando en el fortalecimiento de esta política de Estado para convertir a los cuidados en el cuarto pilar de la seguridad social junto con salud, educación y pensiones.

Compatriotas: una educación de calidad es la mejor herencia que una generación puede dejar a la siguiente. Hemos trabajado en abordar las consecuencias de la pandemia en las escuelas, fortalecer la educación pública y reparar deudas que llevaban mucho tiempo sin solución en esta área.

La educación inicial es clave para abrir oportunidades y reducir las brechas de aprendizaje y desarrollo en niños y niñas. Después de años sin actualizaciones legislativas en este nivel, impulsamos y logramos aprobar la ley de modernización de la educación parvularia, lo que permitirá mejorar la calidad y el acceso a los jardines infantiles.

Con la asesoría de un grupo transversal de especialistas, formulamos el Plan de Reactivación Educativa para mejorar la asistencia y enfrentar las dificultades en el aprendizaje derivadas de la pandemia.

Chile avanza con hechos y hoy tenemos evidencias de mejora. A noviembre del año pasado, más de 17.000 estudiantes que habían salido del sistema volvieron a las salas de clases. Además, entre 2022 y 2024 bajamos la inasistencia grave en casi diez puntos.

Asimismo, los puntajes Simce 2024 en cuarto básico fueron los más altos desde 2002 y los grupos socioeconómicos más bajos alcanzaron su mejor registro histórico. Sabemos que los resultados en sexto básico y las brechas de resultados entre hombres y mujeres indican que se requieren más acciones en esa dirección y lo estamos atendiendo.

Hemos dado un impulso decidido a la nueva educación pública de Chile. Hemos escuchado las opiniones expertas y hecho los ajustes necesarios para avanzar de forma responsable y con base en evidencia. Cuando llegamos al gobierno, había 11 servicios locales de educación pública, SLEP en régimen pero con muchos problemas heredados. Al finalizar el gobierno, serán 38, lo que equivale a más del 50% de la educación pública, la que se encontrará en una situación mucho más sólida que la que recibimos, pero aún con grandes desafíos para su consolidación.

Porque más allá de lo que permanentemente repiten quienes no creen en la educación pública, lo cierto es que los estudiantes de los SLEP han tenido un desempeño destacado:

en el Simce 2024, tuvieron mejores resultados que el año anterior en casi todas las asignaturas y niveles, y mejoraron su rendimiento a un ritmo más elevado que los colegios privados, reduciendo con esto las brechas de desigualdad. Pero aún queda muchísimo por hacer.

No me olvido de dónde venimos: de las grandes movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública y contra el negocio y el endeudamiento en educación. Por eso cumplimos también con un importante compromiso con las y los jóvenes de Chile y sus familias: enviamos un proyecto de ley para poner fin al CAE y crear un nuevo Financiamiento de la Educación Superior, más justo y solidario. Espero que este Congreso se ponga del lado de las familias y apruebe esta iniciativa. Con ella, varias generaciones verán que su deuda se alivia significativamente o derechamente se termina, y los futuros estudiantes podrán cursar sus carreras sin la mochila del endeudamiento, retribuyendo cuando ya sean profesionales con un monto acorde a sus ingresos. De este modo, los recursos públicos se usarán de manera más eficiente, pues el Estado ya ha desembolsado más de 9 mil millones de dólares para financiar este crédito. Es un absurdo que no puede continuar.

Terminar con el CAE, por sí solo, no resuelve los desafíos estructurales de la educación superior. Por eso, hemos iniciado una modernización integral del sistema. Queremos instituciones inclusivas, tecnológicas, descentralizadas y vinculadas a sus territorios, con mejores condiciones para la investigación y la innovación, porque el desarrollo nacional exige más y mejor conocimiento especializado. Modernizar también es abordar desafíos urgentes como la sobreduración de las carreras, la salud mental, la igualdad de género y el fortalecimiento de lo público. Ya vemos resultados: la representación femenina en carreras STEM ha aumentado, el programa PACE llegó a todas las comunas en las que hay al menos un liceo público diurno y la matrícula en CFT estatales pasó de 8.400 a 18.000 estudiantes, con meta de 25.000 al cierre del período. Antes que finalice mi mandato, Chile contará con más y mejor educación superior pública y con su primera Estrategia de Desarrollo de la Educación Superior y no dejaremos de insistir en aumentar el financiamiento basal a las Universidades estatales.

Este año, además, promulgamos la ley que reconoce y se hace cargo de la deuda histórica docente, para dar justicia a más de 50 mil profesores y profesoras, tras más de 40 años de espera y lucha. Les cumplimos. Pienso en Patricia Garzo, Nora Palma o Nora Zurita, quien ya no está con nosotros: ellas, y muchos otros profesores, se encargaron de recordarles a sucesivos gobiernos la existencia de esta deuda. Así se hace la buena política, escuchando, conversando y llegando a acuerdos.

En materia de vivienda, sin duda lo más significativo ha sido el Plan de Emergencia Habitacional, con el que nos comprometimos a construir 260 mil viviendas durante nuestro período de gobierno: ya llevamos más de 200 mil, pese a las dificultades que post pandemia ha enfrentado el sector de la construcción que ha sido el que ha enfrentado grandes obstáculos para su reactivación. Por ello hemos creado un fondo de garantía estatal para el crédito hipotecario, una nueva ley de subsidio al dividendo recientemente aprobada por este Congreso y el programa de arriendo a precio justo.

Cada vez que con el ministro entregamos un conjunto habitacional sentimos la alegría de los nuevos vecinos y les transmitimos que los barrios integrados, en donde la comunidad se conoce, se organiza, cuida y cultiva sus espacios comunes, son a la vez barrios más seguros. Ejemplos icónicos de ello en nuestra historia son las Villas Frei y Portales en Santiago. Estamos replicando estas experiencias con el Plan Ciudades Justas, con nuevos conjuntos habitacionales integrados que contarán con espacios públicos como parques, jardines infantiles, centro comunitario de cuidados y de salud mental entre otros servicios en las comunas de Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Quinta Normal, San Miguel, La Pintana, Cerrillos, Talca, Valdivia y Punta Arenas.

La reconstrucción ha sido una tarea constante de este gobierno: nos ha tocado enfrentar grandes catástrofes como los incendios forestales en el sur del país y las inundaciones de la zona centro sur en 2023 y el mega incendio urbano-forestal de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso. Sabemos que el camino para volver a empezar es largo y doloroso. Por eso, hemos desplegado una respuesta integral que aborda no sólo la reconstrucción de barrios, viviendas e infraestructura, sino también la recuperación de ingresos familiares y

apoyos psicosociales. Pero no es suficiente. En un país de catástrofes -que cada vez se hacen más frecuentes producto de la crisis climática-, el Estado tiene limitaciones estructurales para responder con la rapidez y coordinación a la complejidad de acciones que estas tragedias exigen. Por ello el nuevo Ministerio del Interior ha incorporado la tarea de reconstrucción dentro del ciclo de gestión del riesgo de desastres, asumiendo así la conducción de procesos que históricamente estaban dispersos entre distintas instituciones.

Cuando llegamos al Gobierno, yo hice un encargo muy especial al ministro de Transportes y Telecomunicaciones: le pedí que no se olvidara de las regiones y que siguiera mejorando el transporte público, asegurándose de que todos los avances que impulsara siempre tuviesen como horizonte la equidad territorial pues en el corazón de nuestro quehacer están cada uno de ustedes.

Al comparar el avance de estos tres años desde nuestra primera Cuenta Pública destacan trenes, buses y barcazas. Porque queremos más trenes para Chile y recuperar nuestra rica historia ferroviaria, ya conectamos Puerto Montt con Alerce, Puerto Varas y Llanquihue. Son trenes que ha reacondicionado Asmar y que permiten reactivar el que seguramente es el trazado ferroviario más hermoso de Chile. Da gusto ver la alegría y esperanza de quienes combinan trenes y buses al igual que en Santiago en un servicio que se paga con recaudo electrónico y un solo pasaje. Otro avance elocuente es el del puente ferroviario sobre el Biobío. Hace poco pasó el primer tren de prueba sobre el puente lo que confirma el cronograma que permitirá a los habitantes de Coronel y San Pedro la Paz llegar más pronto a Concepción y aumentar la capacidad de transporte a ofrecer. Y llegaron dos trenes nuevos que modernizarán el querido ramal Talca-Constitución y a esto se suman trenes nuevos para el Metro Valparaíso, la línea 2 de Biotrén y Tren Araucanía. Quiero destacar también el inicio de obras del servicio de Melipilla a la futura estación de Metro en Lo Errázuriz y la adjudicación de las obras del tren que irá de Batuco a Quinta Normal. Estos servicios serán clave en nuestro objetivo de transportar 150 millones de pasajeros al año. Finalmente, ya está en proceso de adjudicación el estudio integral del futuro servicio que unirá Valparaíso con Santiago.

Y nuestros buses eléctricos se han vuelto un símbolo de admiración internacional. Hoy operan en Santiago más de 2.500 buses y pretendemos cerrar el gobierno con 4.400. Esto significa que para entonces dos de cada tres buses en Santiago serán eléctricos. Cuando llegamos al gobierno aún no teníamos estos buses en regiones. Actualmente funcionan 160 en Antofagasta, Coquimbo-La Serena, Valparaíso, Colina, Rancagua y Puerto Montt. Y tenemos licitaciones adjudicadas por 304 buses adicionales en Arica, Iquique-Alto Hospicio, Antofagasta, Ovalle, Tiltil, Rancagua, Concepción y Temuco. Además, la aplicación Red Regional -que entrega información de los tiempos de espera en paraderos y permite planificar los viajes de usuarios y usuarias- ya está disponible en 35 comunas fuera de Santiago.

Quisiera destacar que 2024 fue el año con menos personas fallecidas en siniestros viales en las últimas tres décadas gracias al Plan Calles Protegidas. Trabajemos juntos por conseguir que esta dramática estadística siga disminuyendo.

En la ruralidad, por su parte, nuestros servicios de balsas y barcazas han sumado naves y frecuencias.

El Metro es una política de Estado a la que cada Gobierno aporta. En este período inauguramos las extensiones de las líneas 2 y 3, beneficiando especialmente a vecinos y vecinas de Quilicura, El Bosque y San Bernardo. La futura línea 9 está próxima a iniciar sus obras y conectará Bajos de Mena, Puente Alto y La Pintana directamente con el resto de Santiago. Además, hoy quiero con mucho orgullo anunciar la futura llegada del metro al Aeropuerto de Santiago desde la estación Huelén de la línea 7.

Así, en tan sólo siete minutos, una persona podrá conectar desde Cerro Navia hasta el terminal aéreo por vía subterránea, lo que pondrá a nuestro país y a nuestra capital a la altura de las grandes ciudades del mundo: seremos los primeros de Sudamérica en contar con una conexión directa vía metro con su aeropuerto.

El próximo objetivo de la red de metro, apenas esté asegurado su financiamiento, va a ser llegar con la extensión de la Línea 4A a la comuna de Lo Espejo, y una nueva extensión de la Línea 6 para llegar al poniente de Maipú.

Un ámbito de especial preocupación ha sido el desarrollo portuario, porque es necesario generar obras que se anticipen al crecimiento de nuestro comercio internacional. Los proyectos más emblemáticos son el Puerto Exterior en San Antonio que es el mayor proyecto de infraestructura portuaria en desarrollo en Latinoamérica y el Acuerdo por Valparaíso que después de años de divergencias permitió destrabar la expansión portuaria en la ciudad con participación del Gobierno Regional, la municipalidad y la comunidad. A estos se suman la modernización de los puertos que serán parte del corredor bioceánico en Antofagasta, Iquique y Mejillones. Además, en nuestro querido sur austral ampliaremos el muelle Mardones de Punta Arenas con una inversión de más de 65 millones de dólares.

Igualmente, dejaremos en marcha un plan para modernizar los aeropuertos del país, con mejoras en los de Valdivia, Santiago, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas y la ampliación de los de Rapa Nui, Puerto Natales y Concón.

Chile también avanza en conectividad digital. La conexión 5G que en marzo del 2022 alcanzaba a 136 comunas hoy llega a 338. Y esta semana firmaremos el contrato con Google para construir un cable submarino que conecte a nuestro país con Oceanía: será el primer cable submarino en el Pacífico sur.

Compatriotas, el crecimiento económico es fundamental. Sin embargo su estancamiento se arrastra desde hace más de una década. Pienso que cuando se evalúe con perspectiva histórica, se identificará a nuestro gobierno como uno que gestionó de manera responsable y justa la economía y que empezó a generar las condiciones para revertir esta situación. Como ha dicho el ministro Marcel, la inflexión en la economía ya se está produciendo. Permítanme justificar esta afirmación con hechos concretos.

El estado de la economía al inicio de nuestro gobierno estaba marcado por dos aspectos fundamentales: la capacidad de crecimiento estructural estaba en torno al 2% y existía un sobrecalentamiento de la economía, expresado en una inflación en ascenso que llegó a ser más del 14% anual.

Enfrentamos estos desafíos con una combinación de urgencia y visión de largo plazo. En primer lugar, ordenamos la economía, lo que fue clave para bajar la inflación. Y lo hicimos con una estrategia cuyo foco fue que este necesario ajuste no lo pagaran los más pobres. Así, mostramos que la responsabilidad en el manejo económico y la justicia social deben y pueden ir de la mano.

En segundo lugar, teníamos que crecer al máximo posible dadas las condiciones estructurales que heredamos, y así fue: cada año hemos crecido más de lo pronosticado. ¿Ha sido suficiente? Claro que no. Pero hemos crecido tanto como era posible en el contexto que enfrentamos.

La economía chilena va a crecer más los años que vienen. Porque la macroeconomía está ordenada. Porque existe un conjunto amplio de inversiones privadas avanzando: con montos de inversión récord ingresando al sistema de evaluación ambiental. Porque estamos a semanas de aprobar una reforma estructural a los permisos sectoriales que, sin bajar el estándar regulatorio, va a permitir que estas inversiones se tramiten con mayor celeridad. Porque la reforma de pensiones generará mejores condiciones de ahorro en la economía. Porque hemos invertido más en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, todo ello orientado a los desafíos productivos y ambientales de nuestra economía. Y porque hemos demostrado nuevamente que la política puede servir para generar acuerdos que mejoren la calidad de vida de las personas y eso es también una condición fundamental para el crecimiento sostenible.

Tomamos decisiones difíciles y sinceramos gastos importantes del Estado, haciendo frente a una serie de problemas acumulados. En marzo de 2022 el aumento de la PGU no estaba completamente financiado y ahora sí lo está. También nos hicimos cargo de la deuda con prestadores de salud generada durante la pandemia.

En 2022, tomamos la decisión de hacer un ajuste sin precedentes del 23% en el gasto público, que volvió a los niveles previos a la pandemia y se ha mantenido ahí. Nuestra administración frenó el rápido crecimiento de la deuda pública de los 15 años anteriores.

En esto los datos no mienten, pese a que se insiste lo contrario: después de que la deuda bruta creciera en casi 13 puntos del PIB durante la administración anterior, en este periodo lo ha hecho en poco más de 5 puntos del PIB, según datos que todos pueden revisar. Si la comparación se hace en términos de deuda neta la diferencia es aún mayor.

Los sueldos reales de las y los chilenos llevan subiendo más de dos años consecutivos. La deuda total de los hogares se ha reducido desde el año 2022. El último Índice de Desarrollo Humano, que mide el progreso en la esperanza de vida, la educación y los ingresos, subió el puntaje de Chile a su máximo histórico y nos situó nuevamente como el país líder de América Latina. Sin olvidar los desafíos que persisten, estas son noticias que validan y afianzan el camino emprendido.

Compatriotas: el modelo que permitió a nuestra economía crecer durante las décadas de los 90 y los 2000 está agotado, y ya hace más de 15 años la productividad del país está estancada.

Para volver a crecer con fuerza debemos promover la inversión y diversificar y abrir nuevos mercados, al mismo tiempo que construimos una economía más justa y sostenible y aprovechamos las claras ventajas del país en industrias como el litio, el cobre, las energías renovables, el hidrógeno verde y la economía digital.

Los proyectos de inversión no se desarrollarán a todo su potencial si no logramos modernizar y acelerar la tramitación de permisos. Los diagnósticos al respecto han sido muchos, pero la verdad es que ningún gobierno había asumido la construcción de una solución a cabalidad. Estamos avanzando decididamente en esta dirección sin que ello signifique, por ningún motivo, bajar los estándares regulatorios, porque estos existen para proteger a las personas y el medioambiente.

Estamos a semanas de aprobar una reforma que crea un nuevo sistema para los permisos sectoriales, más rápido, simple y transparente para las inversiones grandes y pequeñas. Este proyecto reducirá los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70%. Aceleraremos hospitales, data centers, industrias, pero también las pequeñas inversiones, que cuando se

suman hacen grande a nuestra economía. Por ejemplo, los trámites para ampliar un restaurante pasarán de demorar ocho meses a dos meses y medio.

Chile necesita crecer y debe hacerlo con justicia social. El crecimiento económico se transforma en desarrollo cuando hay redistribución de la riqueza y el bienestar alcanza a todos. Crecer más requiere también mayor diálogo social, como estamos haciendo por ejemplo en la región de Biobío con su plan de fortalecimiento industrial, con sindicatos y empresarios trabajando codo a codo para generar más industria y empleos.

De esto se trata el Royalty Minero, que redistribuye la riqueza que se extrae de nuestra tierra. Desde el año pasado el sueldo de Chile está llegando con recursos frescos a todas las regiones y a 308 comunas, como he podido ver en Catemu, Calama, Tierra Amarilla o Marchihue.

Hoy Chile es más justo porque tenemos una ley de cumplimiento tributario que combate la evasión y la elusión. Quienes evaden el pago de impuestos hacen un daño tremendo a la sociedad y ahora deberán enfrentar el peso de la ley.

También el 2024 rompimos récords con más de 5 millones de turistas extranjeros que visitaron nuestro hermoso país, un 40% más respecto a 2023. En lo que va de 2025, la tendencia positiva crece aún más: hasta abril, el país ha recibido 2,5 millones de visitantes internacionales, lo que equivale a un incremento del 41% respecto al mismo período del 2024. El turismo puede ser una viga maestra de nuestro desarrollo.

La necesidad urgente del mundo por descarbonizar sus industrias y utilizar energías más limpias es una inmensa oportunidad para Chile. Tenemos los recursos, la experiencia y somos un proveedor serio y confiable de los llamados minerales críticos: cobre, litio y otros recursos clave para la transición energética.

La Estrategia Nacional del Litio constituye un hito histórico para el país: estamos construyendo un nuevo sueldo para Chile, porque en nuestro territorio tenemos las mayores y mejores reservas de litio del mundo. Hemos dado al Estado un rol fundamental en esta industria. Además, avanzamos con protección medioambiental y con desarrollo

científico y tecnológico en torno al litio y los salares. Les aseguro que, dentro de una década, vamos a valorar haber seguido este camino, pues traerá consigo un legado de mayor recaudación, empleo y, con ello, mejor calidad de vida para las y los chilenos.

Seguimos avanzando para materializar el acuerdo que permite a Codelco, nuestra empresa del cobre que es motivo de orgullo nacional, participar de manera mayoritaria en la producción de litio en el Salar de Atacama: así, nuestra empresa estatal se convertirá en un líder mundial en este mercado, como ya lo es en el cobre. El protagonismo de Codelco en esta materia es bueno para Chile, porque asegura que las riquezas del litio queden en nuestro país y que proyectemos una minería sostenible, cuya producción no se interrumpa.

Estos proyectos ocuparán nuevas tecnologías de extracción de litio, las que permitirán extraer más litio, pero con un menor impacto en el medio ambiente. Porque no hay estrategia de crecimiento posible si no cambiamos de manera sustantiva la forma en que producimos y el vínculo de las industrias con las comunidades. Aprovecho de enviar un saludo a Mireya Morales, de Diego de Almagro, dirigente de la comunidad colla más antigua de la Región de Atacama, que ha sido parte de este proceso.

En esa línea, en diciembre pasado tuvimos una fructífera reunión en La Moneda con representantes de las comunidades del pueblo lickanantay. Y es que la Estrategia del Litio la hacemos juntos.

Además, estamos avanzando con el compromiso inédito de aumentar la superficie de salares con protección ambiental en la zona norte del país: hoy sólo está protegido en torno al 8%, llegaremos a más del 30% con la creación de la red de salares protegidos. Igualmente, el Instituto del Litio y Salarés impulsará la investigación social y ambiental y el desarrollo tecnológico en esta área.

Al llegar al gobierno, encontramos a la Enami con altos niveles de deuda y dificultades operacionales, y tomamos decisiones para revertirlo. Gracias a ello, en 2024 Enami tuvo utilidades de 131 millones de dólares. Hoy, además, está liderando un proyecto para

aumentar la capacidad de fundición y refinería del país en Atacama, tal como me comprometí con la región.

Al igual que en minería, Chile es uno de los líderes mundiales en el uso de energías renovables, gracias a un trabajo que trasciende gobiernos y con el compromiso conjunto del sector público y el privado.

Estamos trabajando para que todo Chile tenga un mejor acceso a la energía, con mejor infraestructura y estabilidad del suministro, por ejemplo con la ley de transición energética y mejorando sustantivamente la capacidad de almacenamiento. Además nos preocupamos de que las alzas de las cuentas de la luz producto del descongelamiento post pandemia sean mitigadas para las familias que más lo necesitan mediante el subsidio a un millón 800 mil hogares.

La energía es real, se siente y puede mejorar la vida de una comunidad. Ejemplos concretos de esto son el mejoramiento y acondicionamiento térmico de 116 escuelas a lo largo del país. Así, por ejemplo, alumnos del Liceo Polivalente de Ancud ya no pasan frío en sus salas de clases; estudiantes de la Escuela Internado Quinquén de Lonquimay, que en invierno quedaban aislados por la nieve, hoy tienen electricidad y calefacción aseguradas, y la comunidad de la Escuela Nefalí Reyes de Vicuña tiene un buen resguardo del calor de la tarde.

Para impulsar la industria del hidrógeno verde elaboramos un Plan de Acción al 2030, avanzamos en dar certezas regulatorias, en crear la infraestructura necesaria para que la industria funcione, y capacitar a las y los trabajadores para este nuevo sector.

Chilenas y chilenos: el desarrollo futuro del país se construye de la mano del conocimiento y las nuevas tecnologías, para producir más y mejor, agregar valor y cuidar el medio ambiente. Para que el conocimiento que nuestro país necesita florezca en territorio chileno, debemos creer y apostar por el talento local.

Por eso, en 2024 lanzamos el Fondo de Financiamiento Estructural de Investigación, Desarrollo e Innovación para Universidades, FIU, que asegurará los recursos para investigar a largo plazo, sin depender del financiamiento proyecto a proyecto.

El acceso a financiamiento es una de las demandas más sentidas por las empresas innovadoras —las *startups* y *scaleups*—, que requieren un impulso para que sus ideas y proyectos puedan escalar y así aportar al desarrollo de nuestro país. De esto se trata el proyecto de ley que ingresamos en 2024 que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo; esperamos su pronta aprobación.

Un país que no invierte en inteligencia artificial hoy, corre el riesgo de quedar rezagado en el escenario global del mañana. En Chile, estamos convencidos de que la innovación y la tecnología son las herramientas clave para construir un futuro más inclusivo, sostenible y competitivo. Por eso, estamos trabajando con determinación para traer ese futuro al presente, invirtiendo en capacidades, en talento y en infraestructura que nos permitan liderar en esta nueva era digital.

Quiero compartir con ustedes un hito que nos llena de orgullo: desde Chile estamos liderando el desarrollo de Latam GPT, el primer modelo de lenguaje en inteligencia artificial hecho desde y para América Latina. El futuro digital también debe hablar en nuestro idioma, con nuestras voces y para nuestra gente. Ejemplo de ello es que Chile contará con dos nuevos centros de supercómputo especializados en inteligencia artificial, gracias a una inversión pública de 14 millones de dólares impulsada por Corfo y el Ministerio de Ciencia.

También hemos incrementado significativamente el financiamiento en investigación, infraestructura y apoyo logístico para la ciencia antártica. Al finalizar el gobierno, habremos presentado el Plan Estratégico Antártico 2026-2030 que seguirá fortaleciendo la posición de Chile y de Magallanes como puerta de entrada al continente blanco, que es y seguirá siendo un continente de ciencia y de paz.

Así lo hicimos con acciones como el inicio de las funciones del rompehielos Almirante Viel, orgullo nacional construido íntegramente en nuestro país por Asmar, iniciativas que el Plan Continuo de Construcción Naval.

En materia de contribución a la Política Nacional Espacial y a la consolidación del Sistema Nacional Satelital, liderado por la Fuerza Aérea de Chile, en 2024 se inició la construcción del Centro Espacial Nacional, ubicado en Cerrillos, que estará terminado antes de terminar nuestro mandato, incrementando la autonomía y soberanía espacial de nuestro país.

Quiero contarles que en los próximos días realizaremos la primera sesión de la Comisión Asesora Presidencial para la conmemoración del centenario del Tratado de Lima, Arica 100, cumpliendo el compromiso que asumí junto a los parlamentarios de la Región de Arica y Parinacota. El trabajo de esta comisión, que se desarrollará durante ocho meses, nos permitirá proyectar con claridad los principales hitos que impulsaremos para el desarrollo de una región tan estratégica y querida para nuestra patria. Además, en el otro extremo de Chile, en las regiones de Aysén y Magallanes, hemos transformado en permanente el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, con el objetivo de que la evaluación presupuestaria de las políticas públicas no discriminen a regiones con menos población donde se hace soberanía y también se construye Chile día a día.

En esta línea, sabemos que los gobiernos regionales necesitan reglas claras de funcionamiento. Para una mejor gestión presupuestaria pondremos la urgencia al proyecto de ley de regiones más fuertes para habilitar nuevas fuentes de financiamiento, mejor planificación del gasto y altos niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Chile es también un país agrícola, que se debe a sus campos y a su gente. Hemos trabajado con firmeza para potenciar y fortalecer nuestra agricultura, y así lo saben los gremios de agricultores y las organizaciones de campesinos. Estamos creando nuevas oportunidades para la agricultura familiar campesina e indígena, especialmente para que mujeres y jóvenes no tengan que migrar a las ciudades en busca de nuevas vidas.

Estamos mejorando las condiciones para vivir del campo: este año lanzamos el Programa Tierras Vivas con el fin de facilitar el acceso a terrenos fiscales para la producción agrícola con arriendos a precio justo. Además, con la modificación de la ley de riego, en 2024 aumentamos en un 74% el apoyo a pequeños agricultores respecto del año anterior.

En 2024 establecimos 200 mercados campesinos, espacios que permiten que las familias puedan comprar directamente a productores, como agricultores y crianceros, quienes tienen aquí una nueva fuente de ingresos.

La pesca es otra de las grandes industrias del país y en nuestro Gobierno dimos un paso clave en un compromiso asumido desde el primer día: promover una nueva legislación pesquera justa, sostenible y debatida con transparencia.

La ley de fraccionamiento cambiará, tras 13 años, la esencia de la actual ley de pesca, y permitirá una distribución más equitativa de cuotas entre la pesca artesanal e industrial. Además, marcará un hito democrático: el proyecto se ha debatido abiertamente, con amplio respaldo parlamentario, y comienza a cerrar un ciclo de ilegitimidad en la política pesquera del país. En los próximos días junto a este Congreso solucionaremos la situación de las cuotas de la merluza para así completar la exitosa redistribución en las otras 21 pesquerías del país.

Durante nuestro gobierno hemos trabajado para que el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible adquiera centralidad en las decisiones del Estado. Lograr este cambio requiere desafiar las lógicas asentadas por décadas en la forma de operar del Estado.

Un ejemplo de ello es la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático que fija el compromiso de ser un país carbono neutral a 2050, con la disminución progresiva de las emisiones que provocan la crisis climática hasta que sean equivalentes a lo que absorben nuestros bosques y océanos. Esto nos permitirá estar preparados y adaptados a sus crecientes efectos, como la sequía, las olas de calor y los incendios. También la aprobación de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa.

Además, durante estos años modernizamos significativamente la institucionalidad ambiental chilena. Destaco especialmente el trabajo llevado adelante para aprobar –luego de 12 años de tramitación- el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Este servicio tiene como propósito la conservación de la naturaleza del país, dentro y fuera de las zonas con protección. En estos años hemos creado 37 nuevas áreas protegidas, como el Valle de Cochamó, el Mar de Pisagua, el Desierto Florido de Atacama y el Parque Glaciares en el Cajón del Maipo que incluye el volcán Tupungato. Esto se suma a la protección de nuestros océanos, por ejemplo con la entrada en vigencia de los planes de administración de las áreas marinas protegidas de Rapa Nui, Nazca Desventuradas y del archipiélago Juan Fernández, que seguiremos expandiendo, lo que además refuerza nuestra candidatura a que Valparaíso sea la sede mundial de la protección de los océanos.

Pero queremos ir más allá. En junio de 2019, el Presidente Piñera lanzó el Plan de descarbonización comprometiendo la meta de una matriz sin carbón para el año 2040. Hoy, seis años después, esa meta se ve difícil de cumplir bajo las condiciones actuales. Una vez más, con convicción y responsabilidad, este desafío abre una oportunidad. La inversión privada, el desarrollo económico, el bolsillo de las familias y el cuidado del medio ambiente, aquí confluyen y no compiten. Mientras más proyectos de generación limpia y de transmisión de energía logremos aprobar y construir, antes lograremos descarbonizar y a la vez atenuar el alza de tarifas.

Por eso quiero anunciar que el segundo semestre ingresaremos el proyecto de ley de descarbonización acelerada para facilitar los proyectos de inversión que permitan terminar con las termoeléctricas a carbón. Con la colaboración de todos los sectores podremos no sólo cumplir la meta del año 2040, sino adelantarla para 2035 o antes, dependiendo de la verificación institucional de las condiciones para ello. Lograremos así consolidar una transición energética inédita a nivel mundial.

Es innegable que la demanda ciudadana por bienestar animal ha adquirido cada vez mayor transversalidad en la sociedad chilena, y que la protección y respeto a los animales es una preocupación muy sentida de la ciudadanía.

Si bien en el último tiempo ha habido avances legislativos sobre la materia, todavía hay desafíos pendientes para alcanzar un marco legal a la altura de los tiempos que corren, por ello como Gobierno hemos querido asumir parte de esos desafíos.

Para muchas familias los animales de compañía se han transformado en integrantes importantes del hogar, y su partida trae no sólo dolor sino además un problema sanitario. Los cementerios clandestinos de mascotas, para abordar esta realidad, habilitaremos una línea de financiamiento piloto en la Subsecretaría de Desarrollo Regional para la implementación de cementerios municipales de mascotas.

Igualmente impulsaremos, a través de las respectivas urgencias, iniciativas como las que buscan reforzar el delito de maltrato animal y otorgar mayor seguridad a los dueños de mascotas, mediante, por ejemplo, la prohibición del robo de mascotas o la creación de un registro de personas condenadas por maltrato animal, y sin perjuicio de ello, aumentaremos desde ya la fiscalización actividades para perseguir el maltrato animal en el marco de la actual legislación.

En tiempos convulsos, la cultura nos recuerda quiénes somos porque al vivir nuestros patrimonios, al cuidarlos y disfrutarlos, también vamos tejiendo cohesión social. Es lo que forja nuestra identidad, nuestro espíritu, porque aún desde los rincones más distantes de esta tierra, de Visviri hasta Magallanes y la Antártica chilena, nos conectamos como chilenos y chilenas. No por nada este fin de semana recién pasado celebramos otro Día de los Patrimonios con nuevo récord: más de 3,5 millones de visitas y actividades en más del 90% de las comunas de nuestro país. Ya creamos el Día del Patrimonio para Niños y Niñas el 23 de agosto, pero al ver el entusiasmo de la ciudadanía por conocer y habitar nuestros espacios comunes, he encargado a la ministra de Cultura organizar una segunda fecha permanente del día de los patrimonios a realizarse durante febrero.

Este ámbito tiene un espacio relevante y preponderante en nuestro gobierno. Por eso hemos avanzado firmemente: el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha crecido un 87% desde 2022, un paso significativo para alcanzar el 1%.

Estamos desarrollando el Plan de Infraestructura Patrimonial. Ya hemos ejecutado más de 11 mil millones de pesos, lo que ha permitido desarrollar obras que se encuentran en diferentes etapas de implementación, como el Museo Regional de Atacama y la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes. Ha sido fundamental para esta gestión descentralizar los recursos en cultura, potenciar las regiones y trabajar junto a los gobiernos regionales.

Este año tuvimos una nueva versión de los Trenes Culturales, un encuentro entre el arte y nuestra historia ferroviaria que releva a los creadores y artistas locales con grandes exponentes de la música nacional. Hemos estado en el norte, centro y sur del país desde marzo de 2024, este último fin de semana en Arica, bajo el Morro, y completaremos 12 estaciones este año en Puerto Varas.

También incrementamos los recursos para la programación de nuestros museos y triplicamos la adquisición de colecciones bibliográficas que se distribuyen a lo largo de las más de 600 bibliotecas públicas del país. Estamos invirtiendo en proyectos de mejoramiento de infraestructura en espacios como el Museo Nacional de Bellas Artes o la Biblioteca Regional Gabriela Mistral en Coquimbo. Justamente este 2025 también estamos celebrando los 80 años desde la obtención del Premio Nobel de nuestra poeta, incentivando la lectura de su obra en Chile y el mundo, apoyando el proyecto para que la Región de Coquimbo lleve su nombre, y proyectando una gran escultura en su honor en el eje Alameda-Providencia. Y como Chile es un país de poetas y escritores, hemos recuperado por ley que el Premio Nacional de Literatura se entregue todos los años.

Invertir en cultura, aunque algunos pocos crean que es algo desechable o accesorio, también crea empleo y oportunidades para quienes dedican su vida al arte. Por eso aumentamos en más de un 40% el presupuesto de nuestros fondos artísticos, creamos el Mercado de Industrias Creativas e impulsamos una agenda decidida en materia audiovisual y del libro para internacionalizar y enaltecer el nombre de Chile en el mundo.

Este 2025, además, cumplimos con un avance concreto para la sostenibilidad del sector cultural, entregando financiamiento directo y no concursable a organizaciones de trayectoria a lo largo de todo el país, como la Escuela de Música y las Artes Rapa Nui de la

gran pianista Mahani Teave, el Museo de Arte Moderno de Chiloé, el Ballet Moderno Austral de Los Lagos, la Fundación Vicente Huidobro y el Festival de Cine de Lebu, entre otros.

Desde 2022, nuestro gobierno ha impulsado una transformación en el deporte nacional, con una visión inclusiva, descentralizada y de largo plazo. Hemos aumentado en un 50% el presupuesto destinado al deporte de alto rendimiento, lo que ha permitido consolidar el mejor ciclo olímpico de nuestra historia y fortalecer el desarrollo de nuestros atletas y sus procesos de preparación. Hemos construido y renovado más de un millón de metros cuadrados de infraestructura a lo largo del país, dotando a las regiones de espacios modernos y accesibles para la práctica deportiva. Solo por poner un ejemplo: el Estadio Nacional, completamente renovado, se ha transformado en un parque deportivo de alto estándar abierto a la ciudadanía, donde conviven espacios públicos de calidad con los centros de entrenamiento de nuestras selecciones.

Este 2025, Chile es sede de una serie de eventos internacionales de primer nivel, incluyendo los Juegos Parapanamericanos Juveniles, el Mundial Sub-20 de Fútbol, el Mundial de Ciclismo, el Mundial Junior de Hockey sobre Césped, la AmeriCup de básquetbol y los Mundiales Junior de Tenis. Además, logramos ser elegidos como sede del Mundial de Olimpiadas Especiales 2027, un reconocimiento al compromiso del país con la inclusión y la equidad.

Así, Chile organizará nuevamente eventos deportivos internacionales, como ya lo hicimos con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2023. Estos esfuerzos que las instituciones públicas realizan para que estos eventos sean desarrollados con seguridad y se vivan como fiestas deportivas, lamentablemente no se observan de igual forma en el caso de los clubes del fútbol profesional en nuestro país. Las nuevas atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública, así como las exigencias impuestas por la nueva Ley de Seguridad Privada que entrarán en vigor en noviembre próximo, exigen a los organizadores de los eventos deportivos una responsabilidad mayor a las que han tenido hasta ahora. Sacamos poco con que el Estado cumpla su rol si los dirigentes de los clubes deportivos y

su Federación no asumen las obligaciones que les impone la ley: en la medida que se sigan resistiendo a ello, serán responsables de privar a las familias de la alegría del fútbol. He instruido al Ministerio de Seguridad Pública que sea implacable en las exigencias impuestas por las nuevas normas y haga efectivas las responsabilidades a las organizaciones deportivas que las incumplan. En este contexto, nos parece relevante que prontamente sean despachados los siguientes proyectos de ley: el que modifica la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional y el que regula las sociedades anónimas deportivas, de moción parlamentaria.

A nivel formativo, este año impulsaremos los Juegos Deportivos Escolares que llegarán a más de 200 mil niños y niñas de todo Chile, abarcando el 93% de las comunas del país, generando oportunidades de desarrollo deportivo desde la niñez y fortaleciendo la educación a través del deporte. En esa misma línea, esperamos aprobar este año el proyecto que busca asegurar al menos 60 minutos diarios de actividad física en los establecimientos educacionales como un paso fundamental para mejorar la salud física y mental de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Necesitamos que más personas hagan deporte, como un derecho, un hábito y una herramienta concreta para enfrentar el sedentarismo, la obesidad y sus consecuencias en la salud pública. Queremos construir una verdadera cultura deportiva, donde todas las personas encuentren un espacio para moverse, competir o simplemente disfrutar. Aún hay deportistas que requieren más apoyo y lugares donde se necesita más cobertura.

Chilenos y chilenas: somos más fuertes como sociedad cuando existe un Estado de derecho robusto, donde todos y todas somos iguales frente a la ley, cuando existe una nítida separación e independencia de poderes, y cuando las diferencias se resuelven de manera pacífica.

En este contexto, a ninguno de nosotros escapa que en los últimos años hemos debido enfrentar un conjunto de casos de irregularidades, abusos o fraudes que han indignado, con razón, a la opinión pública.

Frente a todos y cada uno de esos casos nuestra posición es la misma: deben ser investigados acuciosamente para el total esclarecimiento de los hechos. Quienes han delinquido, defraudado o abusado de la confianza, afectando la fe pública, deben responder ante la justicia y recibir las máximas penas que establece la ley.

La corrupción daña nuestra democracia, y en estas materias no hay empates posibles. Los abusos y delitos son acciones que deben ser condenadas legal, social y políticamente.

Por ello, desde el inicio de nuestro Gobierno hemos venido trabajando en desarrollar una Estrategia Nacional de Integridad Pública que contempla más de 210 medidas orientadas a mejorar la integridad y la transparencia y prevenir la corrupción.

A ello se suman las recomendaciones que entregó el informe de la Comisión Asesora Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y el Estado, conocida como la Comisión Jaraquemada, que abordó también el traspaso de recursos públicos a entidades privadas y fundaciones, y propuso nuevos resguardos y exigencias, las que hemos asumido. Por ejemplo, a través de las sucesivas leyes de presupuesto, hemos propuesto cambios que han elevado los estándares de estos traspasos.

Asimismo hemos presentado o impulsado en el Congreso un conjunto de proyectos de ley: el que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, el que mejora la regulación del lobby, el de integridad municipal, transparencia 2.0, beneficiarios finales, entre otros.

Llamamos al honorable Congreso a trabajar juntos para que, sobre la base de estas iniciativas y otras tantas impulsadas por los propios parlamentarios, logremos un acuerdo transversal que nos permita reimpulsar, con sentido de urgencia, la agenda de probidad y transparencia. Chile requiere más y mejores herramientas para hacer frente a las diversas formas de afectación de la fe pública.

El poder no es algo que uno se merezca o se apropie; es un acto de confianza que la sociedad otorga, que debe ser honrado día a día y aun así solo está prestado, para que se

utilice para buscar el bien común. Nadie es dueño del poder ni lo tendrá para siempre y, menos puede ser usado como un escudo frente a la propia ciudadanía.

Por ello, hay que cuestionar siempre las expresiones del tipo “esto siempre se ha hecho así”. Uno debe ser capaz de desafiar continuamente la inercia, desde la racionalidad, los principios y la ética, porque dicha inercia nunca va a ser una buena explicación de cara a la ciudadanía.

El oportunismo, el abuso o la pillería, aunque se ejerzan en el ámbito privado, tarde o temprano contaminarán lo público.

Si bien las normas, leyes o reglamentos son necesarios para que el sector público sea más predecible y transparente, éstas no pueden reemplazar al buen criterio. No existen reglas o contratos que den cuenta de todas las circunstancias que concurren a la decisión de un órgano o una autoridad pública. La capacidad de actuar con criterio es un requisito para todo quien sea seleccionado para un cargo directivo o desde el cual se ejerza potestad pública.

En materia de transparencia e integridad, no existe el empate político. Tratar de excusar los errores propios en aquellos cometidos por otros, antes o ahora, no nos excusa ni nos salva, sino que a lo más nos hunde a todos juntos. A los ojos de la ciudadanía no existen grandes distinciones entre gobiernos, coaliciones, partidos o autoridades; somos todos servidores públicos a quienes se les evalúa continuamente.

Estas convicciones son especialmente importantes para quienes creemos en el valor de lo público, en que el Estado es la expresión institucional de la sociedad y que tiene una función noble que cumplir, para la cual no existen sustitutos a nivel individual o del mero funcionamiento de los mercados. Se trata de principios relevantes para quienes tratamos que las leyes defiendan a los pobres y los débiles del abuso de los poderosos o los violentos y de que las instituciones públicas estén ahí para hacer de este objetivo una realidad. Creo que la política, cuando se ejerce de manera honesta y desinteresada, es una herramienta transformadora para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. De cada uno de nosotros depende reivindicarla en este sentido profundo.

Respecto al tema de licencias médicas que en las últimas semanas ha impactado a la ciudadanía, mi criterio ha sido muy claro: todo quien haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad, y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad es la destitución del cargo.

Sin embargo, quiero decir también que no pueden pagar aquí justos y probos por quienes han cometido actos de corrupción. Contrario a lo que algunos esgrimen como pretexto para retroceder en derechos y jibarizar al Estado, la institucionalidad pública chilena es muy robusta comparada a nivel internacional. Tenemos capacidad para aprovechar las crisis para mejorar, y sostener dichos procesos a través de diferentes gobiernos.

Y eso último es justamente lo que seguimos haciendo. Años antes del importante informe sobre licencias médicas de la Contraloría General de la República, el gobierno y este Congreso ya estaban trabajando para disminuir el ausentismo en el sector público. Dos semanas antes de dicho informe promulgamos la Ley 21.746 que endurece sanciones contra el mal uso de licencias, con multas de hasta 40 millones de pesos y la inhabilidad de por vida para emitir licencias en el caso de médicos reincidentes en las malas prácticas, con sanciones que llegan incluso hasta la privación de libertad. Además, ya al inicio de 2024 se instalaron mesas de trabajo para dirimir entre el justo ejercicio de derechos y aquellos casos en que se hacía un uso abusivo de licencias, y se restringió la dotación de los servicios que no mejoren sus indicadores con planes de gestión ad hoc. En la misma línea, seguiremos generando medidas administrativas y legislativas que mejoren la capacidad de los organismos de control y propongan nuevos parámetros de pago que desincentiven el mal uso de licencias.

Ante la fuerte crisis de confianza en las instituciones, resulta clave que la política sea capaz de dar soluciones y no entramparse en debates estériles que impidan resolver las principales demandas ciudadanas.

Tal como señalé en la Cuenta Pública del año pasado, considero clave avanzar en una reforma al sistema político que se haga cargo del diagnóstico ampliamente compartido

sobre atomización que traba los acuerdos necesarios para el país y dificulta que los ciudadanos y ciudadanas distingan lo que representan las diferentes fuerzas políticas.

Sé que podemos no estar de acuerdo en todos los instrumentos, pero se requiere avanzar. Por ello, este mes enviaremos como complemento a las iniciativas en actual tramitación parlamentaria, un proyecto de ley que modifica los requisitos para constituir partidos, generando incentivos para evitar la fragmentación y, de esa forma, avanzar hacia la consolidación de fuerzas políticas más representativas.

Frente a uno de los problemas más antiguos y dolorosos que arrastramos como República, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, constituimos la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Fue un esfuerzo que contó con el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas, buscando situar este conflicto donde O'Higgins y Freire siempre lo imaginaron: en el corazón de la política y bajo el sueño de una patria unida, inclusiva y justa. Esta Comisión ha sido un valioso espacio de diálogo, de escucha, y de propuestas concretas para resolver quizás el más complejo conflicto histórico que persiste en nuestro país. Ha sido un testimonio de buena política, aquella que convoca, dialoga, discute y resuelve con transversalidad y amplitud los desafíos propuestos. Su trabajo se trasladó por las cuatro regiones en un esfuerzo inédito y voluntario de ocho comisionados de orígenes políticos, ideológicos y sociales muy diversos. Para ellas y ellos, todo el respeto y agradecimiento de Chile.

En el corazón del informe de la Comisión está una sólida propuesta de nuevo sistema de tierras, para dar pie a un nuevo entendimiento entre el Estado y el pueblo mapuche, entre comunidades y sectores productivos. Pero además han logrado entregar propuestas que atienden el dolor de todas las víctimas, de toda la violencia, la histórica y la de las décadas recientes, y ofrecen un camino equilibrado que todo gobierno, actual y futuro, pueda recorrer, con más desarrollo para los habitantes de Biobío al sur en el mediano y largo plazo.

No estamos condenados a repetir la historia permanentemente. Las propuestas de la Comisión, que presenté recientemente al país, ya están en marcha, entre ellas la consulta

indígena que comenzará en julio y el reforzamiento del apoyo a las víctimas de violencia y terrorismo. Si bien las medidas contempladas exceden largamente los plazos de nuestro gobierno, trabajaremos hasta el último día para implementar esta agenda y traspasar a la futura administración ya no un conflicto, sino un proceso en implementación, que construya paz, desarrollo y justicia para todos los habitantes del territorio. Convoco a este Congreso pleno y a todos los candidatos presidenciales a comprometerse con este proceso para garantizar así su continuidad en el tiempo.

Cuando en 2023 conmemoramos los 50 años del golpe de Estado, suscribimos un compromiso que llamamos “Por la democracia siempre”, en el que condenamos sin matices las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990.

Se trata de un gesto de unidad nacional en torno al respeto irrestricto a los derechos humanos, en cualquier circunstancia y lugar. Valoro el gesto patriótico de los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, porque a pesar de las diferencias políticas, nos unimos en torno al reconocimiento de la dignidad intrínseca e inalienable de cada ser humano. No me cabe duda de que si el expresidente Aylwin hubiese estado vivo también lo habría suscrito.

Como país no estamos exentos de responsabilidades y deudas pendientes en materia de derechos humanos. Por eso, en nuestra primera Cuenta Pública de 2022 anunciamos la creación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, para que la tarea de buscar a los desaparecidos y esclarecer las circunstancias de su muerte o desapariciones no quede en los familiares de las víctimas sino que la asuma, como corresponde, el Estado que fue quien los hizo desaparecer.

Reconstruir la verdad sobre lo que pasó con estos compatriotas es hoy una responsabilidad permanente del Estado chileno. En marzo anunciamos el Plan de Expropiación de terrenos de Colonia Dignidad, y puedo informar al país que su decreto estará listo este mes, cumpliendo un compromiso adquirido en la Cuenta Pública del año pasado. Abrazo desde aquí a todas las víctimas de tortura, a los familiares de detenidos

desaparecidos y ejecutados políticos. Sin ustedes, sin su lucha, sin su desgarrador llamado a la memoria y esperanza, no estaríamos aquí.

Compatriotas, como todos sabemos, en 1995 se autorizó la construcción de un penal especial destinado a los criminales de lesa humanidad por los delitos ocurridos en dictadura: la cárcel de Punta Peuco. Era otro Chile y desde mi punto de vista no existe justificación para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición de especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a personas según los requerimientos de gendarmería. No solo es una medida de justicia, es también una necesidad de gestión para nuestro sistema penitenciario.

Para mirar de frente el futuro, debemos cerrar y reparar las heridas de ayer.

Por eso, en diciembre de 2024, creamos la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la Verdad de las Vulneraciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sename, que, en un plazo de un año, deberá recoger testimonios, y entregar propuestas para una reparación integral de esta infancia vulnerada.

Asimismo, la mesa interinstitucional de trabajo sobre adopciones forzadas o irregulares que anunciamos el año pasado ha terminado su trabajo y, siguiendo sus recomendaciones, crearemos un Banco de Huella Genética, que permitirá contar con una vía extrajudicial para la búsqueda de orígenes, para posibilitar la reunificación familiar.

Desde el Gobierno, estamos trabajando para consolidar un catastro oficial de víctimas y una red interinstitucional para atender a las necesidades concretas de quienes sufrieron daños graves producto del actuar de agentes del Estado durante el estallido social. Lo hemos hecho de forma participativa y dialogante con organizaciones y víctimas, y para responder a las necesidades más urgentes fortalecimos el programa Pacto, que hoy además de atender a víctimas de trauma ocular ha ampliado su cobertura de atención en salud, atención psicosocial y rehabilitación funcional incluyendo a personas con lesiones graves y lesiones por perdigones.

En el ámbito internacional hemos desplegado una nutrida agenda para poner en alto el nombre de Chile, abrir nuevos mercados y diversificar nuestros socios comerciales. Estas acciones cobran aún más relevancia por los vaivenes actuales de la economía global, afectada por la guerra comercial y el proteccionismo. Pueden estar tranquilos, compatriotas, que ante esta crisis que se alza por todo el planeta estamos trabajando unidos defendiendo los intereses de Chile.

Por ello, he liderado visitas oficiales y de Estado a países como India, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Japón, Brasil y Emiratos Árabes Unidos, reuniéndome con los principales mandatarios y líderes empresariales de dichos países, consolidando y abriendo nuevos mercados, atrayendo nuevas inversiones, concretando intercambio educacional y científico, compartiendo la riqueza de nuestra cultura.

Frente a posiciones que promueven un mundo sin reglas, Chile ha tomado postura, abogando por un comercio libre y justo, por el respeto de los acuerdos y el fortalecimiento del multilateralismo. Hemos defendido la autonomía estratégica como sello de nuestra política internacional, lo que implica dialogar con todas las grandes potencias y países, sin elegir una u otra: nuestra única bandera es Chile, nuestra soberanía y el bienestar de las familias y no aceptaremos imposiciones de alianzas ni agravios a nuestras decisiones soberanas.

Chile es un país respetado en el escenario internacional y lo es por su larga y coherente tradición, sólo interrumpida durante la dictadura, de defensa de la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional, de cuya construcción hemos sido partícipes.

En virtud de estos principios, como jefe de Estado he guiado la política internacional de Chile, sosteniéndome en lo construido por mis antecesores democráticos. Por eso hemos sido claros en nuestro rechazo a la guerra de agresión desatada por Rusia frente a Ucrania, al fraude electoral de la dictadura venezolana que reemplazó la diplomacia por los insultos y arrebatos, a la represión y el silenciamiento de la digna oposición a la dictadura familiar de Nicaragua, y ahora a la deriva autoritaria del gobierno de El Salvador, que tiene a algunos políticos chilenos encandilados. Les recuerdo que por muy popular que un

mandatario sea circunstancialmente, desconocer las reglas democráticas y retroceder en derechos y libertades siempre termina costando caro.

Son estos mismos principios los que me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. Por ello llamé a consultas a nuestro embajador en Israel, he instruido el retiro de nuestros agregados militares de dicho país, suspendimos la participación de Israel en la tradicional Feria Internacional del Aire y del Espacio, Fidae, intervenimos en la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel por violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y solicitamos junto a México a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza, después de lo cual se emitieron órdenes de arresto internacional contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y otros altos cargos del gobierno de Israel.

Para que no quepa duda, reitero lo que hemos dicho muchas veces: no aceptamos empates ni elegir entre barbaries. Condenamos categóricamente el terrorismo de Hamas y exigimos la liberación de los rehenes que aún tienen en cautiverio.

Dicho esto, considerando la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel mediante asentamientos ilegales en territorio palestino y el reciente anuncio de expansión de esta política, he decidido que es de toda justicia patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. Además he instruido a la ministra de Defensa que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área. En este sentido, respaldamos la propuesta adoptada por el gobierno de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel.

Compatriotas: quiero cerrar compartiendo con ustedes una reflexión sobre la cultura aplicada en política parafraseando a un viejo intelectual, que creo resume lo que he querido expresar en cuanto a los principios que han inspirado a nuestro gobierno: el liderazgo no se trata de tener la cabeza llena de fechas, nombres o cifras: es la calidad del

juicio, la exigencia lógica, el apetito por la prueba, la noción de la complejidad de las cosas y de la dificultad de los problemas. Es el hábito de la duda, el discernimiento en la desconfianza, la modestia de opinión, la paciencia para ignorar, la certeza de que nunca tendremos toda la verdad. Es tener la mente firme sin tenerla rígida, es estar armado contra la vaguedad y también contra la falsa precisión, es rechazar todos los fanatismos, sospechar de los dogmatismos oficiales pero sin beneficio para los charlatanes. Es venerar el genio pero sin hacer de él un ídolo. Es, en definitiva, siempre actuar sobre la realidad, y no sobre la que uno preferiría que fuera.

Chilenos y chilenas, termino esta, mi última Cuenta Pública, asegurándoles que hemos dado lo mejor de nosotros para hacer más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. He tenido que tomar decisiones difíciles, sin duda, pero sepan que siempre, en cada disyuntiva he puesto por delante el bien común de la gente trabajadora y esforzada de nuestro país, de sus niños y personas mayores, de sus mujeres y sus jóvenes.

Nos quedan nueve meses de gobierno: lucharé hasta el último día por concretar aquellos proyectos que mejoren la vida de nuestro pueblo y representen las ideas de progreso y justicia que nos inspiran. Para la campesina del valle del Huasco, hasta el minero de Calama. Para el niño soñador de Camarones hasta los jubilados de Puerto Natales. Para el rockero de Concepción al pescador de langostas Juan Fernández, para la grumete de Viña del Mar a la emprendedora de Pitrufquén. Para todo Chile.

Los invito a pensar si es que los logros que hemos obtenido habrían sido posibles en un gobierno de otro tipo. ¿Hubiésemos pagado la deuda histórica a los profesores, sacado adelante la reforma previsional, recuperado el diálogo social, o elaborado una Estrategia Nacional del Litio que no dependa solo del mercado? ¿Se habría propuesto poner fin al CAE, defender desde el gobierno el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, o que el Estado se haga cargo de buscar a nuestros detenidos desaparecidos? ¿Habríamos logrado las 40 horas, el Copago 0 en salud, el royalty a la gran minería o el histórico aumento en el sueldo mínimo?

Creo honestamente que no, porque los gobiernos encarnan y expresan proyectos distintos. Y justamente ahí radica la fuerza de la democracia: en que son ustedes, el pueblo de Chile, quienes tienen la soberanía plena de elegir por cuál camino transitar. Nuestro país puede mejorar las condiciones materiales de vida de cada uno de sus habitantes en el marco de mayor justicia social y un sentido de futuro compartido. De nosotros depende.

Estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno, pero sobre todo, estoy orgulloso de Chile. De la fuerza que tenemos como país que desde el sur del mundo levanta su voz y dignidad cada día. Estoy esperanzado del futuro. Por ustedes, por las Violetas que florezcan al andar.

Muchas gracias. ¡Qué viva Chile!